

20207000089571

Al contestar por favor cite estos datos:
Radicado: 20207000089571
Fecha: 2020-09-10 13:10

Bogotá D.C., 8 de septiembre de 2020.

Señor(a):
JUSTA PASTORA PRECIADO DAJOME
Vereda Guayabo
Municipio San Andres de Tumaco
Departamento Nariño
Jairo.burbano@renovacionterritorio.gov.co

Asunto: Comunicación de cesación de beneficios.

Respetado(a) señor(a):

Con la finalidad de cumplir el mandato constitucional previsto en el artículo 22 de la Constitución Política, el cual señala que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, el 24 de noviembre de 2016 el Gobierno Nacional suscribió con el grupo armado FARC-EP el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante el Acuerdo Final).

El punto 4. del Acuerdo Final -denominado "Solución al Problema de las Drogas Ilícitas", se establece de manera puntual que para contribuir al propósito de sentar las bases para la construcción de una paz estable y duradera es necesario, entre otros, encontrar una solución definitiva al problema de las drogas ilícitas, incluyendo los cultivos de uso ilícito, la producción y comercialización de drogas ilícitas.

El punto 4.1. del Acuerdo Final el Gobierno se compromete a crear y poner en marcha el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS-, con el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular, para las comunidades campesinas en situación de pobreza que derivan su subsistencia de dichos cultivos.

El Acuerdo Final en el numeral 4.1.3.2., señala que un fundamento indiscutible de la solución definitiva al problema de los cultivos ilícitos se encuentra en el carácter voluntario y concertado de las comunidades para transitar de economías ilegales a legales con el apoyo del Gobierno Nacional. Para ello, es necesario que este compromiso se materialice mediante la suscripción de acuerdos cuya finalidad, es llegar a tener territorios libres de este tipo de cultivos.



El Decreto Ley 896 de 2017 "Por el cual se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito -PNIS-", en su artículo 2 estableció como objeto del programa: "promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito". En concordancia con lo anterior, el artículo 6 del Decreto Ley 896 estableció que "son beneficiarios del PNIS las familias campesinas en situación de pobreza que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito, que voluntariamente se comprometan a las sustituciones de los cultivos de uso ilícito, la no resiembra, ni estar involucradas en labores asociadas a estos, y que no hayan realizado siembras posteriores al 10 de julio de 2016".

Para garantizar una correcta ejecución de los recursos destinados al Plan de Atención Inmediata – PAI, señalado en el Acuerdo Final, el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito – PNIS, cuenta con una serie de instrumentos que buscan minimizar los riesgos a los que se puede ver expuesto un programa de esta índole. Para ello, se ha elaborado una hoja de ruta de implementación, que dispone en todas las etapas de implementación del programa, del mecanismo de verificación de la información recibida al PNIS, para evitar que personas que no correspondan a la población objeto del PNIS se vinculen al mismo, para lo cual utilizan unos criterios de control, dentro de los cuales se encuentra el uso de una pluralidad de fuentes de datos para contrastar la información ofrecida por los particulares, para determinar su veracidad o exactitud.

Con el objeto de facilitar y asegurar la implementación eficaz del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, dando observancia a los contenidos, objetivos, compromisos, espíritu y principios del Acuerdo Final y salvaguardando los derechos que le asisten a los beneficiarios del programa, en especial los de seguridad jurídica, debido proceso y buena fe, de acuerdo con lo anterior y en concordancia con lo mencionado por la Corte Constitucional en la sentencia C-493 de 2017 al realizar análisis del artículo 6 del Decreto 896 de 2017, estableció que el aludido artículo determina quienes son los beneficiarios del PNIS y "tiene tres componentes: el situacional, el volitivo y el temporal. // El componente situacional impone que para ser beneficiario del PNIS se requiere consistir en una familia, que sea campesina, que esté en situación de pobreza y que derive su subsistencia de los cultivos de uso ilícito. // El componente volitivo exige la suscripción voluntaria de tres compromisos: sustituir los cultivos de uso ilícito, no volverlos a sembrar y no estar involucrados en labores asociadas a esos cultivos ilícitos. // El componente temporal, que consiste en no haber realizado siembras de cultivos ilícitos posteriores al 10 de julio de 2016".

La Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos procederá a analizar en concreto el caso de la señora **JUSTA PASTORA PRECIADO DAJOME** para determinar si la información aportada al programa es veraz con el cruce de las diferentes bases de datos con las que se cuenta.

La señora **JUSTA PASTORA PRECIADO DAJOME**, identificada con cédula de ciudadanía **No. 59.673.411**, se inscribió al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito –PNIS-, mediante formulario **CUB No. 831538**, como CULTIVADOR de cultivos de uso ilícito. En dicho formulario el núcleo familiar asumió compromisos con el programa, entre ellos, "Suministrar información veraz en todos los procesos del PNIS (...)" y a su vez aceptó "(...) que el incumplimiento

de los requisitos y compromisos aquí señalados implica el retiro inmediato del Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito y en consecuencia, no acceder a los beneficios pactados con el Gobierno Nacional (...). Igualmente, en dicho formulario el titular del núcleo familiar dejó consignado “Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la información suministrada durante todo el proceso es veraz, por lo que cualquier intento de fraude en la información consignada en el presente formulario de vinculación, será objeto de sanción con medida administrativa e informada a las autoridades judiciales competentes, de acuerdo a la normatividad legal correspondiente”.

En el marco de los controles previstos por el Programa para el seguimiento de los núcleos familiares durante su desarrollo, tanto en la etapa de registro, vinculación y pagos, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos como resultado de la verificación de la información reportada por los beneficiarios del PNIS y los datos de los archivos de la Agencia de Renovación del Territorio – ART con relación al Programa Familias Guardabosques implementado para los años 2014 y 2015, evidenció que existen algunos núcleos familiares que se inscribieron al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso ilícito – PNIS y a su vez hicieron parte del Programa Familias Guardabosques.

Ahora bien, es necesario aclarar que el Programa Familias Guardabosques, de acuerdo con el documento titulado “Principales Proyectos de Inversión Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional” realizado por el Departamento Nacional de Planeación, fue creado con el propósito de evitar el crecimiento de los cultivos de uso ilícito debido a la débil presencia de las instituciones del Estado como una “iniciativa de desarrollo alternativo, implementado desde el año 2003 que involucra comunidades campesinas, indígenas y afro descendientes localizadas en ecosistemas ambientalmente estratégicos, incluyendo zonas amortiguadoras, con el objeto de revertir los impactos negativos de los cultivos ilícitos”. Dicho programa tenía contemplado una serie de beneficios “por un periodo de tiempo definido, apoyo económico, técnico-ambiental y social, así como alternativas lícitas de empleo e ingresos, a comunidades (...) que se encuentren afectadas por cultivos ilícitos y que se comprometan a mantener estas áreas libres de los mismos”.

En consecuencia, se puede inferir que el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito – PNIS y el Programa Familias Guardabosques, tienen similitudes por cuanto fueron creados por el Estado como una iniciativa para que las personas que voluntariamente se acogieran, hicieran un tránsito de economías de origen ilícito hacia economías legales, de acuerdo al cumplimiento de unos compromisos, para así recibir por parte del Programa una serie de beneficios económicos y asistenciales que garantizaran una mejor calidad de vida y auto sostenimiento.

Así las cosas, el Comité de Gobierno de Datos de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos en sesión No. 8 del 31 de marzo de 2020 determinó que no resulta aceptable que un núcleo familiar que se haya inscrito y por lo menos haya recibido por parte del Programa Familias Guardabosques un pago por concepto de apoyo económico¹, posteriormente se haya vinculado al Programa Nacional

¹ Dentro del Programa Familias Guardabosques los beneficiarios recibían apoyo económico, técnico-ambiental y social, así como alternativas lícitas de empleo e ingresos, dichos beneficios estaban supeditados a que los núcleos familiares dieran cumplimiento a sus compromisos. Cuando un núcleo familiar presentaba incumplimiento se le retiraba del Programa Familias Guardabosques, por lo que el hecho de que algunos núcleos familiares solo hubiesen recibido un primer pago

Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito – PNIS con el tipo de comunidad de CULTIVADOR, de cultivos de uso ilícito por cuanto sus medios de subsistencia de manera previa a su inscripción en el PNIS no deben provenir de los cultivos de uso ilícito ya que debido a la presencia de la institucionalidad del Estado por intermedio del Programa Familias Guardabosques debió haber hecho el tránsito a una economía de carácter lícito.

En virtud de lo previamente mencionado, la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio – ART aplicando las garantías constitucionales del debido proceso, con fundamento en la información suministrada por la dependencia encargada de manejar los datos de los beneficiarios que hicieron parte del Programa Familias Guardabosques, al encontrarse demostrado que alguno de los miembros del núcleo familiar de la señora **JUSTA PASTORA PRECIADO DAJOME** se inscribió en el Programa Familias Guardabosques y por lo menos recibió de dicho programa un pago por concepto de apoyo económico para efectuar su tránsito hacia una economía de origen lícito, procederá con la cesación de los beneficios entregados por el Programa Nacional Integral de Sustitución de cultivos de uso ilícito – PNIS.

Por consiguiente, se evidencia el incumplimiento al compromiso donde se alude “Suministrar información veraz en todos los procesos del PNIS (...)” y al aparte mencionado en su formulario donde se dejó consignado: “Así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la información suministrada durante todo el proceso es veraz, por lo que cualquier intento de fraude en la información consignada en el presente formulario de vinculación, será objeto de sanción con medida administrativa e informada a las autoridades judiciales competentes, de acuerdo a la normatividad legal correspondiente”.

Finalmente, se le informa que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 43 y 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, ley 1437 de 2011, contra la presente decisión procede exclusivamente el recurso de reposición dentro de los diez (10) días siguientes a su notificación ante el mismo funcionario que la expide.

Cordialmente,



HERNANDO LONDOÑO ACOSTA

Director Técnico

Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito
Agencia de Renovación del Territorio

Proyectó: Mileinis Olivieri Morales – Abogada Contratista Equipo Jurídico DSCI.

Revisó: Karina Reyes – Abogada Contratista Equipo Jurídico DSCI.

Aprobó: Jairo Cabrera – Asesor Jurídico DSCI.

por parte del Programa Familias Guardabosques se debió a la falta de cumplimiento de los compromisos adquiridos. En consecuencia, se observa que en su momento el Estado por intermedio del Programa Familias Guardabosques tuvo toda la disposición para atender de manera integral a las familias inscritas.